

11-PC-CE-12

CÁMARA SEGUNDA DE LO CIVIL DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL CENTRO: San Salvador, a las ocho horas del día veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Por recibida la demanda de proceso común de condena de daños y perjuicios, promovida por el licenciado **AMÍLCAR EFRÉN CARDONA MONTERROSA**, apoderado general judicial de la señora **LUCÍA LORENA GUANDIQUE DE JIMÉNEZ**, en contra del ex Director de la Academia Nacional de Seguridad Pública señor **JAIME FRANCISCO VIGIL RECINOS**, y subsidiariamente contra el **ESTADO DE EL SALVADOR**, juntamente con la documentación anexa que consiste en:

- a) Copia simple del documento único de identidad, tarjeta de identificación tributaria y tarjeta de identificación de abogado del licenciado Amílcar Efrén Cardona Monterrosa.
- b) Copia certificada por notario del testimonio de escritura pública de poder general judicial, otorgado en la ciudad de San Salvador, a las catorce horas del día siete de noviembre de dos mil doce, por la señora Lucía Lorena Guandique de Jiménez, a favor del licenciado Amílcar Efrén Cardona Monterrosa, ante los oficios notariales de Julio César Bautista.
- c) Certificación de la sentencia pronunciada por la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia a las nueve horas y tres minutos del día dieciocho de agosto de dos mil cinco, en el proceso de amparo clasificado con la referencia 838-2003.
- d) Hoja de cálculo de sueldos no percibidos y prestaciones sociales por despido de hecho, emitida por el licenciado Andrés Ramírez, contador.
- e) Certificación del Reglamento Interno de Trabajo de la Academia Nacional de Seguridad Pública.
- f) Constancia de empleo y de salario de la señora Lucía Lorena Guandique de Jiménez, emitido por la Jefa de Recursos Humanos de la Academia Nacional de Seguridad Pública.

Sobre la demanda interpuesta, se hacen las siguientes consideraciones:

I. El licenciado Cardona Monterrosa expresa en el escrito de demanda que dirige su pretensión en contra del señor Jaime Francisco Vigil Recinos, ex Director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, y subsidiariamente contra El Estado de El Salvador.

II. Uno de los presupuestos procesales más importantes de todo proceso es la *legitimación activa y pasiva*, que trata de resolver la cuestión de quién debe de interponer la pretensión y *contra quien debe interponerse para que el juez pueda dictar una sentencia que resuelva el tema*

de fondo, esto es para que esa sentencia pueda decidir sobre si estima o desestima la pretensión. El concepto de legitimación va unido a la posibilidad de tener acción para pedir en juicio la actuación del derecho objetivo, en un caso concreto y contra quién puede pedirse.

III. La legitimación se encuentra regulada en el artículo 66 del CPCM, el cual literalmente establece: “Tendrán legitimación para intervenir como partes en un proceso los titulares de un derecho o un interés legalmente reconocido en relación con la pretensión. También se reconocerá legitimación a las personas a quienes la ley permita expresamente actuar en el proceso por derechos e intereses de los que no son titulares”. Dicho artículo establece los casos en que puede intervenir una persona en un proceso sin ser el titular del derecho que se discute, limitándolo sólo a los casos específicos en que sea reconocido expresamente por la ley.

IV. En ese sentido, es necesario que haya una especial condición o vinculación de un sujeto con un objeto litigioso determinado que *le habilita para comparecer o exigir su comparecencia en un proceso*; lo que se pretende es evitar la apertura de toda una actividad jurisdiccional que desemboque en no poder resolver un asunto jurídico debido a que la persona que ha sido demandada no ostenta la calidad de parte en un proceso.

V. En el presente caso se pretende demandar subsidiariamente al Estado, respecto de una situación jurídica suscitada por el señor Jaime Francisco Vigil Recinos, cuando éste fungía como Director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, en vista que se ha determinado por parte de la Sala de lo Constitucional la violación del derecho de audiencia de la señora Lucía Lorena Guandique de Jiménez, quedándole expedito el derecho de iniciar el proceso de liquidación de daños y perjuicios en contra del señor Vigil Recinos, y “*subsidiariamente contra el Estado*”, según reza en los literales b y c de la sentencia emitida por dicha Sala en el proceso de amparo número 838-2003.

VI. La responsabilidad, en términos amplios, implica el deber de reparar un daño ocasionado a un tercero que no estaba en la obligación de soportarlo. Ello significa que cuando se genera un daño, nace el deber de indemnizarlo *por parte de quien lo ha generado o de quien la ley establezca que debe responder en ese caso*. En principio, el responsable es a quien se le impute la autoría del daño producido, sin embargo, en determinados supuestos, responde un tercero por el daño ocasionado.

VII. Esta situación es viable cuando se trata de la responsabilidad de los funcionarios públicos, quienes son los llamados a responder directamente de los daños producidos a un

tercero, y sólo en defecto de éste, cuando por alguna razón insuperable no es posible dirigirse contra el funcionario, mediante la responsabilidad subsidiaria instituida en el art. 245 Cn., responderá el Estado.

VIII. La subsidiaridad implica que la responsabilidad sólo opera de manera residual, es decir que no puede iniciarse proceso de cobro contra el deudor subsidiario sino cuando esté demostrado en la actuación que la labor de cobro en contra el deudor principal ha sido fallida. Doctrinariamente, existen dos posturas sobre cómo exigir la indemnización de daños y perjuicios al Estado, por el carácter de responsable subsidiario. La primera, que atiende a la literalidad de la palabra “subsidiario”, en el sentido que en primer lugar se debe intentar la acción en contra del funcionario responsable ante los tribunales comunes, y sólo cuando ésta no haya tenido resultados puede intentarse contra el Estado, pues es necesario distinguir los conceptos de “solidaridad” y de “subsidiaridad”; y la segunda, que permite la acumulación de ambas pretensiones en un mismo proceso. A criterio de esta Cámara, la responsabilidad subjetiva del funcionario y la subsidiaria del Estado pueden ser objeto de acumulación.

IX. Esta acumulación encuentra su justificación en razones de seguridad jurídica al evitarse la posibilidad de pronunciamientos contradictorios por requerirse dos procesos para juzgar los mismos hechos respecto de personas distintas (el funcionario y el Estado); así como en razones de economía procesal y concentración de las actuaciones jurisdiccionales. La problemática de cómo deberá responder el Estado se resuelve en la posible fase de ejecución de la sentencia que resulte, de dónde primero deberá ejecutarse al funcionario que ha sido declarado responsable de los daños y subsidiariamente, una vez agotada esta instancia, al Estado.

X. El art. 245 Cn. se refiere a la posibilidad del Estado de responder frente a la producción de daños materiales o morales derivados de violaciones a derechos constitucionales, y tal como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, *“el contenido de la misma no debe ser interpretado en forma restrictiva, en el sentido de considerar al Estado -en su carácter de ente soberano al cual se adscribe la Administración central- como único obligado a afrontar dicha carga, ya que al confiar la realización de algunas de sus actividades administrativas a entes públicos a los que se les reconoce una personalidad jurídica, un patrimonio estatal propio y un poder de decisión o de administrarse a sí mismos -entre ellos las instituciones oficiales autónomas- éstos actúan como organizaciones administrativas del mismo Estado, el cual constituye un centro primario respecto de aquéllos”* (sentencia de la Sala de lo Constitucional de las diez horas con cincuenta y

un minutos del día cuatro de febrero de dos mil once, en el proceso de amparo número 228-2007).

XI. Por razones de orden general, las instituciones autónomas son creadas para satisfacer necesidades que el Estado mismo está obligado a cubrir, a las cuales, se les otorga una cierta autonomía para garantizar su eficaz funcionamiento, otorgándoles patrimonios especiales, los cuales, si bien constituyen bienes propios de las instituciones autónomas, provienen todos del fondo estatal.

XII. Lo dicho supone que lo dispuesto en el art. 245 Cn. *no es de aplicación exclusiva a la Administración Central, ya que las instituciones oficiales autónomas constituyen estructuras administrativas de la organización estatal con patrimonio propio, por lo que la responsabilidad a la que se refiere el art. 245 Cn., es exigible a tales instituciones.*

XIII. El art. 1 de la ley orgánica de la Academia Nacional de Seguridad Pública, determina la naturaleza jurídica de dicha institución, estableciendo que se trata de una “*institución autónoma de derecho público*”, que además tiene “*personalidad jurídica, autonomía administrativa y financiera*”, y su “*propio presupuesto*” cuyo patrimonio está conformado según lo dispone el art. 13 de la referida ley.

XIV. Podemos concluir que la Academia Nacional de Seguridad Pública reúne las características que permiten considerarla como un ente descentralizado por servicio o función, ya que concurren los siguientes elementos: a) personalidad jurídica propia; b) actuación de un fin público; c) independencia en el ejercicio de su función, al tener autonomía administrativa y financiera; y d) patrimonio para el cumplimiento de sus fines.

XV. De tal forma, siendo la ANSP titular de un patrimonio propio, el cual encuentra su origen en lo dispuesto por los arts. 1 y 13 de la Ley orgánica de la ANSP, debe señalarse que el resarcimiento (siempre subsidiario) de los daños y perjuicios ocasionados, es exigible a dicha institución autónoma, y no al Estado como Administración Central, quien carece de legitimación pasiva para obrar como demandado en el presente proceso.

XVI. Por ello, la demanda respecto del Estado de El Salvador es improponible por falta de legitimación pasiva, lo que consecuentemente modifica la competencia de este tribunal, pues el señor Jaime Francisco Vigil Recinos, así como los entes descentralizados, deben ser demandados ante los tribunales comunes, art. 39 CPCM. Por ende, con relación al señor Vigil Recinos, la

demanda presentada también es improponible en virtud que este tribunal no posee competencia de grado para conocer de la misma, de conformidad al art. 45 CPCM.

Por tanto, en base a las razones expresadas y disposiciones legales citadas, este tribunal **RESUELVE: A) DECLÁRASE IMPROPONIBLE LA DEMANDA** en contra del Estado de El Salvador, por falta de legitimación pasiva; y **B) DECLÁRASE IMPROPONIBLE LA DEMANDA** en contra del señor Jaime Francisco Vigil Recinos, por carecer este tribunal de competencia de grado.

El licenciado **AMÍLCAR EFRÉN CARDONA MONTERROSA**, puede ser notificado en Condominio Montemaría, número 2904, 1ª Calle Poniente, entre 51 y 57 Avenida Norte, Edificio “C”, tercera planta, apartamento uno, San Salvador, o al fax número 2260-6216.

PRONUNCIADA POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LA SUSCRIBEN